
El declive de la política: la crisis del espacio y del sujeto políticos

Dolors Oller

Un malestar que pone en cuestión la legitimidad política

En la era de las redes, la política, lejos de ser el principio organizador de los seres humanos en sociedad, aparece como una *actividad secundaria*, como una construcción artificiosa e incluso inadecuada para abordar con éxito los retos del mundo contemporáneo. Lo cierto es que vivimos en un complicado mundo en el que las reglas del poder están cambiando a ritmo vertiginoso: de la existencia de un centro con la consiguiente organización piramidal del poder, estamos pasando al desbordamiento de los estados por parte de poderes y tramas transnacionales más fuertes que ellos y, en consecuencia, al *surgimiento de un mundo pluricéntrico*. El poder, lejos de desaparecer, se ha hecho más difuso y difícil de controlar. Y *el valor nace hoy de la inserción en la red* y de la posibilidad de relación más que de dominar un territorio.

El proceso de globalización en el que nos hallamos inmersos parece conducir, pues, a la *crisis de la política*, es decir, del sistema de representación ciudadana sobre el cual se basa la democracia moderna, por cuanto al difuminar las fronteras territoriales, queda afectado el modelo de democracia representativa

Dolors Oller (Barcelona) es profesora de Filosofía Social en ESADE

vigente, pensado para un momento en que los límites territoriales estaban muy claros. Desde el momento en que las comunidades humanas ya no se definen según lógicas exclusivamente territoriales, los circuitos del poder, sus campos de aplicación y sus modalidades de control sufren profundas transformaciones pues no pueden ser los mismos que antaño.

El principio motor de las sociedades postindustriales no es ya el reconocimiento de un interés común que trascienda la confrontación de intereses particulares. Se vive a corto plazo y con una incapacidad manifiesta para pensar a largo plazo. Y con el abandono de la preeminencia de lo político, aunque la separación entre público y privado no desaparece, se banaliza, lo cual lleva a *la crisis de la idea de sujeto*, fundamento de la democracia liberal. Llevado a su último extremo, podemos decir que vivimos en un mundo que ya no se define primordialmente por las colectividades humanas que lo integran -y ello precisamente puede ser causa de identidades fundamentalistas-, sino solamente por los problemas a tratar. Dicho en otras palabras, nos hallamos ante sociedades que gestionan situaciones en lugar de trascender intereses, y dejan de organizarse alrededor de principios, con lo cual el debate político -que a su vez presupone la existencia de un cuerpo político- se vacía de sentido y sustentación. La era de las redes se caracteriza por la incapacidad para expresar una voluntad común.

Se nos plantea, pues, la necesidad de abordar la *importancia de la política*, su papel indispensable en la construcción de sistemas de convivencia más humanos y justos. Si de verdad creemos que “otro mundo es posible”, éste no se podrá edificar a espaldas de la política, sino a través de ella. Sería iluso y peligroso pensar que sólo a base de ONG's y de Movimientos Sociales y de aportaciones de otros colectivos como la empresa van a poder realizarse los grandes cambios que el planeta necesita para subsistir. *Los grandes males de nuestro mundo son estructurales y las soluciones también lo han de ser.* De ahí que la acción política, con todas sus insuficiencias pero también con

todas sus virtudes, sea indispensable. En todo caso, lo que se habrá de plantear es “otro modo de hacer política”, no su eliminación.

Tras la caída de los regímenes de socialismo real, la creciente importancia de la democracia, entendida como patrón universalmente compartido que proporciona legitimidad interna y reconocimiento externo a los regímenes políticos, se ha puesto en evidencia. Ahora bien, por paradójico que pueda parecer, tal importancia ha venido acompañada de la aparición de problemas en el funcionamiento interno de las democracias avanzadas y de un *creciente desprestigio de sus instituciones*. Es por ello por lo que podemos hablar de franca crisis del modelo democrático heredado de la filosofía de la Ilustración¹: los ciudadanos no se identifican con la democracia y la desmotivación en la participación política llega a ser cada vez más un enemigo interno del propio sistema, lo cual es ciertamente preocupante.

Es más, muchos teóricos son de la opinión que el actual modelo de democracia -el modelo liberal de la democracia representativa-, concebido en una coyuntura económica, social y cultural muy distinta a la actual, se halla hoy muy desfasado: sin perjuicio de valorar en su justa medida lo mucho que dicho modelo ha significado de avance en la historia de la humanidad, se nos muestra hoy como muy insuficiente para hacer frente a los retos que nos plantea la era de la *globalización*².

Además, bueno es recordar que el conjunto de instituciones y prácticas del modelo democrático vigente se ha mostrado perfectamente compatible con amplios márgenes de desigualdad social, así como de manipulación y control del poder por parte de oligarquías consolidadas. Estas formas de dominación, si bien son más sutiles que el autoritarismo, no por ello son menos reales y efectivas, e incluso en cierto modo más peligrosas, por

1 Puede verse, entre otras, la ya clásica obra de DAHL, Robert A. (1993), *La democracia y sus críticos*, Barcelona, Paidós.

2 En este sentido, OLLER i SALA, M^a. Dolors (2002), *Un futuro para la democracia. Una democracia para la gobernabilidad mundial*, Barcelona, Cuadernos Cristianisme i Justícia, n^o 115, pp. 21-23.

cuanto son más difíciles de detectar por una ciudadanía satisfecha y adormecida, incapaz de abrir los ojos a una realidad que contradice la *versión oficial*. De ahí que la mayoría pueda condenar “democráticamente” a los más débiles a la pobreza y a la marginación, cosa que está sucediendo en las sociedades desarrolladas y pretendidamente democráticas, donde sólo los “afortunados” tienen voz y voto efectivos.

Por todo ello se puede detectar en nuestras sociedades democráticas desarrolladas un cierto malestar que está poniendo en crisis el

La insatisfacción de la ciudadanía está poniendo en cuestión la legitimidad política y el modelo democrático

modelo al deslegitimarlo ante los ojos de muchos ciudadanos que ponen en cuestión su idoneidad para cubrir las exigencias de representatividad de la ciuda-

danía y para lograr la cohesión social. Tal insatisfacción de la ciudadanía es un hecho que está poniendo en cuestión la legitimidad política y nos urge a preguntarnos por las razones que nos llevan a esta situación.

Una política de elites y una representación de intereses

Lo demuestran las encuestas hasta la saciedad: la ciudadanía se siente cada vez más alejada de los políticos y de la política, considerada cada vez más como *propiedad-monopolio de una elite* que hace de la política una profesión distanciada de la realidad y busca la defensa corporativa de sus intereses, con lo cual acaba desfigurándose la consecución del “bien común”. A su vez, la Administración se ha diversificado y especializado tanto que no aparece como expresión de una voluntad colectiva distinta de la multitud de intereses privados, sino como *una simple*

prestataria de servicios. Por su parte, y como veremos más adelante, en el interior de los estados la distinción entre intereses públicos e intereses privados pierde parte de su pertinencia al haber dejado de ser monopolio de los estados la gestión de los primeros³.

Lo cierto es que vivimos en un mundo en el que el poder emana de la capacidad relacional más que del saber, y en el que el interés público y el interés privado tratan de vincularse para conseguir una mayor eficacia, pero que por ello mismo se trata de un mundo en el que los gobernantes se hallan muy expuestos a caer en dinámicas que poco tienen que ver con la búsqueda del interés colectivo.

Por otra parte, la profesionalización de los intereses disuelve la política en una multitud de enfrentamientos particulares, en los que se disuelve la idea de interés general: la lógica de la profesionalización no se plasma en la conciencia de un destino compartido, sino en una extremada fragmentación y en ausencia de un poder regulador reconocido por todos como superior a los intereses particulares. De ahí que el político lo sea cada vez menos por vocación, en servicio del “bien común”, y se deje arrastrar por lógicas siempre parciales, profesionales, técnicas, al dominar siempre la lógica instrumental y haberse eclipsado la vocacional, de servicio.

En este contexto se puede entender que se busque primero la seguridad y el orden y se desvirtúen los restantes valores. Así, el discurso público se centra en cómo prevenir las lacras que el desarrollo desordenado produce, en lugar de hablar de la mala distribución que provoca desigualdad. Es un discurso que responde a los diversos miedos que van tomando cuerpo en la cotidianidad política y social: miedo ante la desestabilización económica y política, ante la inseguridad ciudadana, ante los desastres ecológicos, ante un terrorismo que se ha hecho global, etc..⁴. En este sen-

3 En este sentido, GUÉHENNO, Jean-Marie (2000), *El porvenir de la libertad. La democracia en la época de la globalización*, Barcelona, Paidós, p. 17

4 CAMPS, Victoria (1988), *Ética, retórica, política*, Madrid, Alianza Editorial, pp.100-112.

tido estamos asistiendo a la renuncia a muchos de los valores que definen precisamente un sistema democrático: en especial tras el 11-S estamos viviendo un peligroso y preocupante *desplazamiento autoritario* a lo largo y ancho del mundo y muy concretamente en los países de tradición democrática. Se está utilizando sistemáticamente la amenaza de un terrorismo global para violar y recortar los derechos fundamentales y las libertades más básicas, incrementándose la represión en materia de disidencia política. La seguridad está primando sobre la libertad poniendo en entredicho la salud democrática de nuestras sociedades⁵.

Asistimos a una verdadera *desparlamentarización* de la vida política y a su sustitución por la representación de intereses y las negociaciones sectoriales. Así se fijan, por ejemplo, aspectos clave de la política económica por parte de las organizaciones empresariales, sindicales y representantes del Gobierno. Ello lleva a la toma de decisiones políticas utilizando una vía procedimental ajena a los mecanismos parlamentarios de la democracia tradicional y, por tanto, ajena también a los clásicos mecanismos de control, llevados a cabo en sede parlamentaria.

Asimismo, estas prácticas de negociación y concertación, si bien son ágiles y eficaces, tienen como consecuencia verdaderos *monopolios en la representación de intereses*, al ser preferidas unas organizaciones a otras en función de su poder de negociación. De esta suerte, el interés general no se ve ya como bien común sino como interés particular, de grupo.

Todo ello lleva al progresivo paso de una representación política a una representación de intereses y al ascenso de una especie de *neocorporativismo*, con la consiguiente dificultad para tener una visión global de los problemas. En estas condiciones, se favorece la insolidaridad global y quien sale perdiendo siempre es el más débil.

5 OLLER i SALA, M^a Dolors (2002), op. cit., pp.14-16.

6 GONZÁLEZ FAUS, J.I. (1993), "Despotismo tecnocrático. Meditación sobre la democracia", en *Noticias Obreras*, 1.7.1993 - 15.7.1993, pp.38-39

Economicismo y política gerencial

La única política posible parece ser la de la lógica que el sistema económico proporciona, con lo que aquella pierde su especificidad: los mismos razonamientos que suelen aplicarse al mercado se aplican al debate democrático. De lo que se trata es de responder con eficacia a las demandas de unos electores-consumidores y las campañas electorales tienen mucho de marketing para colocar un producto en el mercado, esta vez político.

Y como que la eficacia de los políticos se mide por los votos alcanzados, toda actuación suya acaba

convirtiéndose en política electoral: la política ya no se concibe como proyecto sino como programa y planificación a corto plazo, con lo que el pragmatismo se ha impuesto claramente a los valores, quedando la actividad pública cautiva de la economía.

El *economicismo*, una de las notas características de la política actual, lo impregna todo, juntamente con el pragmatismo tecnocratizador de la actividad pública, que es dejada en manos de los expertos, y la profesionalización de los políticos, exigida por la complejidad de los retos actuales. Y con ello, de hecho, se han destruido los fundamentos de la propia democracia, puesto que la subordinación del poder político al poder económico, el economicismo que tiñe toda la actividad política, en esencia supone una peligrosa anulación de la ética constitutiva de la democracia. Así, con criterios economicistas se decide sobre guerras, créditos, compra y venta de mercancías, reconocimientos diplomáticos, bloqueos comerciales, apoyos políticos, leyes de inmigración, inversiones, golpes de Estado, etc. Hoy la razón

Se han destruido los fundamentos de la propia democracia, puesto que la subordinación del poder político al poder económico

de Estado no es otra que la razón de los mercados financieros, muy lejos de corresponderse con la “razón de la sociedad”. Y una política sin ética ha dado origen a mecanismos impersonales y a “estructuras sin alma”.

La política con gran frecuencia se conecta a cuestiones relativas a la economía, especialmente a *cuestiones técnicas*, que quedan lejos del ciudadano de a pie. Sólo entienden de ellas los expertos, de modo que, en definitiva, las élites piensan por el pueblo, en una especie de despotismo tecnocratizador que tiene mucha similitud con el despotismo ilustrado; hoy, como antaño, se continúa gobernando para el pueblo pero sin el pueblo⁶. Además, esta colonización de la vida política por la economía ha hecho que el estatuto del consumidor se haya afirmado sobre el del ciudadano, lo que ha supuesto la mercantilización de la vida política. En estas circunstancias, *el mercado gobierna y el gobierno gestiona lo que el mercado ordena*.

La política aparece hoy como una actividad secundaria, supe-
ditada a las exigencias de los intereses del poder económico, verdadero poder de nuestros días. Además, ello es percibido por la ciudadanía como *inevitable*, ya que el “pensamiento único” no se cansa de recordarnos que la actividad política es poco adecuada para la solución de los problemas del mundo contemporáneo⁷.

El debilitamiento de la política está facilitando que las grandes corporaciones transnacionales estén llevando a cabo, en la práctica y bajo la apariencia de la máxima racionalidad y apoliticismo, una auténtica *toma del poder* y un control al margen de la política, que queda frecuentemente prisionera de intereses privados. La imposición de la “utopía del mercado” está llevando a corporaciones transnacionales a ocupar, de forma casi imperceptible -pues no se cambian ni leyes ni constituciones- los cen-

6 GONZÁLEZ FAUS, J.I. (1993), “Despotismo tecnocrático. Meditación sobre la democracia”, en *Noticias Obreras*, 1.7.1993 - 15.7.1993, pp.38-39.

7 Ver al respecto, ESTEFANÍA, Joaquín (1997), *Contra el pensamiento único*, Madrid, Taurus, p. 26.

tros neurálgicos de la sociedad. Y todo ello a espaldas de los poderes democráticos.

El Estado Democrático de Derecho se ve, así, progresivamente reemplazado por un *Estado de Derecho Privado*⁸ reducido a un código de reglas que se legitiman por su buen funcionamiento, aunque están desprovistas de cualquier connotación moral. Se impone así la racionalidad instrumental y la política deviene gerencial: el político -y el partido- no se valora por su capacidad de generar ideales o de actuar en consecuencia, sino por su efectividad y rapidez para resolver problemas -o aparentar resolverlos de forma convincente-, pasando a ser un gerente de la cosa pública. De ahí que las democracias actuales estén faltas de una estructura moral. Los valores que se han impuesto son los valores del mercado, mientras que el modelo de conducta es el de las estrategias empresariales que se mueven por el beneficio, dejando de lado otros valores, totalmente indispensables para la convivencia, como son los de la gratuidad o la generosidad⁹.

Crisis de los partidos políticos, medios tradicionales de hacer política

Nuestras democracias son *partitocracias* o *democracias de partidos*. Éstos, cada vez más centralizados y burocratizados, se han convertido en instrumentos destinados a crear consenso alrededor del programa de una elite y han perdido gran parte de sus funciones de socialización política. De ahí que la vida política a menudo no sea el reflejo de los conflictos sociales sino de los conflictos entre las élites dirigentes, así, van distanciándose de las bases y de las necesidades reales de la población. En realidad, cada vez hay menos coincidencia entre legitimación popular y legitimación representativa y los partidos políticos filtran,

8 Terminología utilizada por JÁUREGUI, Gurutz (2000), *La democracia planetaria*, Oviedo, Ediciones Nóbél, p.54.

9 OLLER SALA, M^a Dolors (2002), op. cit. , pp. 16-18

de hecho, la voluntad ciudadana y contribuyen a ciertas formas de alienación política: las elites piensan por el pueblo.

Por otra parte, los partidos políticos gestionan excesivamente el acto electoral, marginando al ciudadano, el cual se limita a elegir lo que le imponen desde arriba de forma imperativa. Hay que tener en cuenta al respecto que las listas cerradas y bloqueadas -modalidad prevista, por ejemplo, en nuestra Ley Electoral General- generan una representación impersonal; además, las candidaturas no son previamente conocidas y estimadas por los votantes, sino que están en unas listas cuya confección ha sido realizada por los comités directivos de los partidos.

El divorcio entre ciudadanía y clase política está servido

Asimismo, hay que constatar que la pérdida de radicalidad y coherencia ideológica de los partidos a fin de ajustarse al mercado político hace que falten proyec-

tos mobilizadores. Y la contraposición entre lo real y lo oficial, el contraste entre lo que llamamos clase política y los ciudadanos, se hace cada vez más evidente. De ahí que podamos observar el sentimiento generalizado de que los problemas graves, aquellos que de veras preocupan e inquietan a los ciudadanos, no son precisamente los problemas que preocupan a los gobiernos. El divorcio entre ciudadanía y clase política está servido. Paralelamente, se aprecia en los partidos una incapacidad para salir de los márgenes de sus posiciones partidistas y para comprender y traducir las exigencias de los ciudadanos.

La falta de una verdadera alternancia

Vivimos inmersos en un *proceso de deserción ciudadana*. Bajos niveles de información e implicación; escasa identificación con los partidos políticos, altas tasas de abstención en las elecciones..., todo lo cual parece corresponderse más con una

cultura política de súbditos que de ciudadanos responsables y participativos¹⁰. La gente vota con la sensación de que no se le ha ofrecido otra manera de manifestar sus preferencias políticas. Y el modelo de democracia representativa se nos muestra cada vez menos idóneo para reflejar la pluralidad y expresar los diversos matices de la sociedad, e insuficiente como cauce de participación. De ahí que muchas decisiones de los poderes públicos se encuentren faltas de legitimidad al no tener suficientemente en cuenta las preferencias de los ciudadanos y de los grupos presentes en la escena pública, que formalmente son sujetos de muchos derechos, pero en la práctica carecen de verdadero poder real.

En consecuencia, la democracia se limita a ser cada vez más un recambio ordenado de las elites políticas y a legitimar el orden establecido, siendo difícilmente permeable a políticas nuevas, más alternativas. Ello hace que nos encontremos con la existencia de una elite en el poder, prácticamente inamovible, que prescinde incluso de los cambios en las estructuras formales de gobierno. De ahí que podamos hablar en muchos casos de falta de alternancia real. Se crea así un *pluralismo ficticio* que queda reducido, de hecho, a un puro simulacro.

Se diría que estamos en presencia de una “clase” política, más o menos vasta, que se afana en adquirir y cultivar posiciones privilegiadas y a la que cuesta mover del poder, convertidos los partidos en una especie de empresa que garantiza un lugar de trabajo. Y cuando se produce el cambio político, a menudo el proceder del nuevo equipo de gobierno apenas se distingue de su predecesor, por cuanto, ávidos los partidos para conseguir los votos del centro electoral, descafeinan sus programas políticos y los hacen converger, mostrándose acrílicos con las estructuras, especialmente con las económicas.

En este contexto, la participación electoral se limita a legitimar un sistema que de hecho se ha convertido en una especie de *democracia censitaria*, porque sólo vota la mayoría solvente

¹⁰ CAPELLA, J.R. (1993) *Los ciudadanos siervos*, Madrid, Trotta, p. 136

económicamente o la más integrada en los patrones mayoritarios, es decir, la *mayoría satisfecha*¹¹. Asimismo, los ciudadanos acostumbran a votar más en contra de lo que temen que a favor de lo que esperan, cuando en una coyuntura determinada son llamados a pronunciarse electoralmente.

Por su parte, la estabilidad de los gobiernos a menudo es más aparente que real; se debe a técnicas jurídicas y a mecanismos constitucionales que la mantienen -y ahí cobran gran importancia la regulación de mecanismos de exigencia de responsabilidad política tales como las mociones de censura y las cuestiones de confianza de los sistemas parlamentarios-. Sin embargo, detrás de ello se esconde una gran falta de legitimación manifestada en los altos niveles de abstención que se producen en las elecciones. La legitimidad del sistema se basa cada vez más en la aceptación pasiva que en el consentimiento positivo de los ciudadanos, de forma que las democracias acaban dependiendo de una legitimidad por defecto, caracterizada por el desinterés, la inhibición y la apatía políticos¹².

La incidencia de los medios de comunicación en la política

Se ha llegado a decir que el enemigo más sutil de las democracias es no ya el poder económico en cuanto tal, sino, muy en concreto, el poder de los medios de comunicación. Y entre ellos destaca la TV que manipula y ejerce un control sobre los ciudadanos, domesticándolos y socializándolos acríticamente para que legitimen el sistema, impidiendo la formación de una opinión pública adulta, pieza ésta fundamental en un sistema de veras democrático¹³.

11 Es interesante al respecto, GALBRAITH, J.K. (1992), *La cultura de la satisfacción*, Barcelona, Ariel, que trata de los EE.UU pero que lo que dice puede hacerse extensible a las democracias europeas.

12 HERMET, Guy. (1991), "El desafío de las viejas democracias", en *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, nº 129, Madrid, UNESCO, pp. 475 y ss; y del mismo autor, (1989), *El pueblo contra la democracia*, Instituto de Estudios económicos, Madrid

13 PASQUINO, Gianfranco (2000), *La democracia exigente*, Madrid, Alianza, p.20; SARTORI nos habla al respecto de la videopolítica, *videocracia* o *telecracia*-

Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación de masas son los que más influyen en la conformación de la opinión pública y, a través de ésta, en las creencias y en los hábitos de los ciudadanos. Y ahí cobra especial relieve el tema de la posesión de los medios de comunicación, problema que remite a los poseedores del poder económico y pone a prueba el régimen democrático, su propia existencia y su democraticidad efectiva. Hay que recordar al respecto que es a través de los medios de comunicación que se expande el llamado *pensamiento único*, verdadera ideología de la época postmoderna, que adormece a una ciudadanía ávida de consumo y de evasión.

Las audiencias millonarias de las TV han transformado la manera de movilizar las voluntades ajenas para conseguir las pretensiones de los gobernantes. El hombre público en general, el político, mantiene hoy con el destinatario de sus mensajes y sus palabras una relación totalmente distinta que la que tenía antaño. Ha cambiado, ni más ni menos, que la tecnología de la política y los medios de comunicación se han erigido en el espacio en el que se forman las opiniones y decisiones de los ciudadanos. Hoy, el poder político se juega en los medios de comunicación, que se han convertido cada vez más en principio de formalización del ejercicio del poder e influyen mucho en la opinión ciudadana. Condicionan el consenso y las adhesiones y son, en realidad, importantes centros de poder. No es que la política sólo opere en los medios, pero en las sociedades democráticas avanzadas el proceso político se decide, esencialmente, en ellos, especialmente en los medios televisivos. Y eso quiere decir que, ya que nuestras sociedades están cada vez más centradas en la producción, distribución y manipulación de símbolos, el nivel simbólico de la política es hoy más importante y decisivo que nunca y, por tanto, los mensajes han de generar símbolos capaces de recibir apoyo. En la actualidad, no son los programas los que deciden la política; tampoco una buena gestión por sí sola es capaz de garantizar el apoyo popular: la polí-

tica actual es comunicación simbólica, expresada conflictualmente en el espacio mediático.

En consecuencia, la política ha tenido que adaptarse al lenguaje mediático, que tiene tres reglas principales: 1) La simplificación del mensaje. 2) La personalización de la política. 3) El predominio de los mensajes negativos, de desprestigio, del adversario sobre los positivos, lo que conduce a la política de la sospecha y del escándalo como arma fundamental de acceso al poder a través de la eliminación del contrario. De ahí que la escena política, especialmente en la última década y en muchos países, se haya visto dominada por acusaciones de corrupción,

El proceso político se decide, esencialmente, en los medios televisivos

utilizada ésta como arma arrojada por todos los partidos. Ello ayuda a mermar la credibilidad de la política, que pasa a ser identificada con la corrupción¹⁴.

Asimismo, hay que constatar que la TV favorece, voluntaria o involuntariamente, la emotivización de la política, es decir, una política reducida a episodios emocionales. Y lo hace contando una infinidad de historias lacrimógenas y sucesos conmovedores. Debemos tener presente al respecto que la palabra produce siempre menos conmoción que la imagen y que la cultura de la imagen, creada por la primacía de lo visible, rompe el delicado equilibrio entre pasión y racionalidad, haciendo retroceder a esta última. Y la política emotivizada solivienta y agrava los problemas sin proporcionar, sin embargo, solución alguna¹⁵.

¹⁴ Ciertamente que hay un alto grado de corrupción en el mundo; pero no es mayor que antes y disminuye en cuanto más democrática es la sociedad. Hay que tener en cuenta que la corrupción es, sin duda, un síntoma de disolución del Estado de Derecho, una verdadera gangrena para el mismo y, por tanto, una amenaza para la democracia. Ataca muy fundamentalmente uno de los pilares de la vida política: la transparencia

¹⁵ SARTORI, Giovanni (1998), *Homo videns*. La sociedad teledirigida, Taurus

La lógica del medio televisivo empobrece el discurso político, catapultando a la escena política a los telehábiles y a los teleféricos. Asimismo, favorece a los candidatos adinerados y a los partidos poderosos, que pueden permitirse costosas campañas a base de anuncios publicitarios: el *marketing político* es esencial para llegar al pueblo.

En definitiva, pues, las exigencias de los medios obligan a la política a presentarse según modalidades sustancialmente deterioradas, aunque espectaculares, en detrimento del contenido, o trivializadas para captar audiencia de forma indiscriminada e incluso en ocasiones, manipuladora. A destacar, también, que la manipulación de las opiniones es mucho más acentuada y fácil de realizar en el medio televisivo, puesto que se presta mejor a ello que cualquier otro medio de comunicación.

La judicialización de la política y la democracia demoscópica

Desde hace más de una década venimos asistiendo a un fenómeno, el de la *judicialización de la política* y la democracia demoscópica o de la opinión pública, que aparentemente parece ser un progreso incontestable en el sentido de una mayor democracia, pero que, en realidad, merece un análisis más profundo, pues sólo sería así en el caso de que nuestras democracias tuvieran una opinión pública muy crítica y lúcida que pudiera hacer de contrapoder frente a unas instituciones fuertes. Pero nada más lejos de la realidad.

Entendemos por judicialización de la política el *intento de resolver por medio de procesos y juicios controversias políticas*. Acontece cuando los actores políticos han tomado las sedes judiciales como lugares donde dirimir diferencias que deberían plantearse en el campo estrictamente político, cosa que ocurre con harta frecuencia. Por otra parte, si profundizamos un poco, podremos constatar que en el tema de la judicialización de la política, en realidad se está vaciando el propio espacio de la política: se piden cuentas sobre si se han respetado unas reglas y procedimientos determinados, de suerte que el debate sobre un problema se transforma así en un debate sobre la

integridad personal de un hombre, sobre su respeto a las normas institucionales, transformadas éstas en último criterio de juicio en el que el juego político no tiene otro objeto que la preservación de las reglas del juego, único estándar aceptado por todos en sociedades que han perdido puntos de referencia compartidos.

A ello hay que añadir el enorme poder que tienen los medios de comunicación sobre la sociedad, acrecentado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como el hecho del llamado *periodismo de investigación*, especialmente en materias de corrupción, que pone en marcha muchas veces el aparato judicial. Nos encontramos así que jueces, medios de comunicación y opinión pública se están convirtiendo en los tres poderes estelares que vienen a sustituir a la tríada clásica de la democracia representativa.

En este juego a tres bandas, medios de comunicación y jueces actúan muchas veces al unísono, utilizando éstos prensa y TV como caja de resonancia, con el peligro de que ello equivalga a una especie de *juicio popular* y desaparezca la presunción de inocencia, con la consiguiente indefensión del encausado. Asimismo, la rumorología acaba sustituyendo a los hechos y la autoridad de la opinión publicada no sólo se impone a todas las demás autoridades, sino que además su omnipotencia debilita el principal resorte de toda democracia: el debate colectivo. Fácil es entonces deducir que, con ese telón de fondo, la política parece condenada a ser esclava de los medios.

Surge así un nuevo tipo de hombre público: inquieto ante el juez, angustiado ante los medios de comunicación y obsesionado por los sondeos. En consecuencia, ya no rigen los cánones clásicos del *hombre de Estado* (reflexivo, decidido, carismático, etc): las cualidades del nuevo político son la ductilidad, la flexibilidad y la facilidad de palabra. Y mientras el periodista se mueve en un ambiente de casi impunidad, el político está sometido a la presión psicológica constante de los medios¹⁶, cuya omnipotencia rompe

¹⁶ MINC, Alain, (1995), *La borrachera democrática. El nuevo poder de la opinión pública*, Madrid, Temas de Hoy.

los complicados equilibrios de pesos y contrapesos que implica la democracia representativa. A ello hay que añadir que cuando las instituciones son débiles, *la democracia de la opinión pública o demoscópica es intrínsecamente inestable*.

**La crisis de las instituciones y del control por ellas ejercido.
La desnaturalización de la división de poderes.**

Si el grado de satisfacción de los ciudadanos frente a las respectivas instituciones democráticas constituye una medida cierta de la calidad de la democracia, lo que percibimos a este respecto no es nada halagüeño. Y la situación del Parlamento, vaciado en la práctica de gran parte de sus competencias, puede sernos de utilidad para ayudarnos a valorar el alcance de la crisis de los mecanismos de control institucional que estamos padeciendo, así como las transformaciones que atañen a uno de los principios fundamentales de todo Estado de Derecho, el principio de la división de poderes.

La evolución del Estado moderno nos muestra claramente que *la hora de los Parlamentos ha declinado*. El Legislativo, en apariencia una institución básica por cuanto es expresión directa de la soberanía popular, ha dejado de ser el foro principal de la vida política, con lo cual sufre un importante declive, transformado en caja de resonancia de decisiones que se toman en realidad en otras partes (cúpulas de los partidos, comisiones de expertos, instancias económicas, etc.). Asimismo, se ha venido viendo vaciado de sus funciones: no es foro de un verdadero debate, control del Ejecutivo ni resonancia de los problemas sociales. Más en concreto, los Gobiernos, demasiado distanciados de los ciudadanos, de sus sentimientos y aspiraciones, a pesar de las proclamaciones constitucionales asegurando que están supervisados, fiscalizados o controlados por las Cámaras representativas, se hallan prácticamente fuera de esta supervisión y control.

Por otra parte, la democratización del Estado liberal así como el sistema de partidos ha conducido, paradójicamente, a la posi-

bilidad de una recuperada concentración de poderes en manos del partido o de la coalición gobernante, que desvirtúa la independencia orgánica del Parlamento respecto del Gobierno y puede hacer tanto o más presidencialistas los sistemas denominados parlamentarios que los nominalmente llamados de aquella forma. Otro tanto puede decirse respecto del Poder Judicial. Muchas veces su independencia, esencial para la preservación de la democracia, queda en entredicho, a menudo por las injerencias y presiones del Ejecutivo sobre su funcionamiento y organización.

Así, *se ha desdibujado la división de poderes*, garantía de la democracia, produciéndose una acentuación del poder del Ejecutivo, verdadero motor del Estado, y una progresiva autonomización de la burocracia. La tendencia es ir hacia Gobiernos fuertes, favorecidos por la existencia de normas constitucionales y legales, como las mociones de censura constructiva, las cuestiones de confianza fáciles de ganar por los gobiernos, leyes electorales que

potencian las formaciones políticas más importantes o el bipartidismo, todo lo cual lleva a una concentración de poder. De esta suerte, la esta-

La concentración de poderes en manos del partido gobernante desvirtúa la independencia del Parlamento

bilidad de los gobiernos se transforma en un fin en sí mismo en vez de serlo el servir al pueblo. Se gana así en eficacia, pero a costa de un cierto estatismo autoritario.

Además, si bien es cierto que el modo de proceder del ejecutivo es más ágil que los largos trámites parlamentarios, hay que tener también en cuenta que es más difícil de controlar y más fácilmente permeable a la presión de los grupos de interés, especialmente económicos, por lo que se ha podido hablar de priva-

tización del estado en el sentido que la gran empresa ha penetrado en el poder político del Estado-nación.

Las decisiones, en lugar de tomarse de forma lineal, encerrando cada actividad en una competencia precisa, se fragmentan y el debate político tradicional -de principios y de ideas- se difumina e incluso se disgrega, lo cual es puro reflejo de la disgregación del proceso mismo de decisión y de su profesionalización. Se agota así la lógica institucional, cosa que incide negativamente sobre la política. Y si a ello unimos la crisis de la concepción espacial del poder y de la toma de decisiones, veremos que la fragmentación que ello provoca no viene sino a agravar la situación, por cuanto lo que se pone en cuestión es, ni más ni menos, el propio espacio de la política.

La crisis del Estado-nación tradicional y su repercusión en la política

La organización política que nos ha legado la Ilustración, en la que existía un vínculo muy grande entre la noción de ley y la de territorio, vive horas muy bajas. El tradicional modelo de Estado-nación soberano está cediendo posiciones e influencia ante los nuevos actores de la globalización. En la sociedad red emergente, los estados forman parte de un sistema más complejo en el que conviven con organismos interestatales, empresas transnacionales, organizaciones voluntarias, movimientos sociales, grupos mediáticos globales, etc, lo cual, por otro lado, está transformando las posibilidades de participación, y por tanto, también las posibilidades de ejercicio de la ciudadanía democrática aunque requiere la necesidad de comprender la naturaleza cambiante del poder y de las comunidades humanas que este estructura, lo cual no siempre es fácil.

Parece haber terminado el proceso de concentración del poder iniciado hace varios siglos y, con él, el esfuerzo paralelo para controlar el ejercicio de tal poder mediante un equilibrio institucional. Asimismo, estamos asistiendo a una creciente

incapacidad de las formas democráticas para representar a los ciudadanos a la vez en la gestión de lo global (donde reside el poder) y en el gobierno de lo local (donde vive la gente). Dicho en palabras de Daniel Bell, el Estado se ha hecho “demasiado pequeño para los problemas grandes y demasiado grande para los problemas pequeños”.

El desarrollo de nuevas formas de organización política ha provocado el surgimiento de un *mundo multilateralizado* en el que el poder queda difuminado y descentralizado en un conjunto de diversos niveles organizados, de centros de decisión diferentes y transversales, que se encuentran enlazados y que interaccionan formando una abigarrada red de corporaciones y empresas multinacionales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, asociaciones profesionales, etc. Estas redes, que actúan intra y supra-estatalmente, refuerzan, por un lado, la capacidad de actuación y solución de problemas mediante la acción coordinada, pero por otro lado limitan el poder y la capacidad de decisión de las organizaciones y, también, de los propios estados que se ven cada vez más condicionados en sus tomas de decisión.

Se ha modificado así, sustancialmente, uno de los paradigmas teóricos fundamentales sobre el que se ha sustentado hasta ahora el poder y también la legitimidad de los estados: la soberanía. En realidad, nos encontramos ante una profunda crisis del modelo estatal, tal como ha venido siendo concebido hasta el presente. Y ello tiene importantes consecuencias para el espacio de la política.

Mientras que la lógica de la soberanía era expresión de la preeminencia y del papel fundacional de las instituciones políticas, más allá de cualquier justificación de carácter utilitarista, *la lógica contemporánea lo es de la capacidad para prestar servicios*. Y al ser el Estado cada vez menos la expresión de una soberanía que estaría sobre la sociedad, queda tan sólo como una de las instituciones organizadoras de la misma. De ahí que, a la vez que entra en competencia con los otros actores, situándose a su

mismo nivel, esté también en constante adaptación y redefinición de sus competencias, pasando a legitimarse por los servicios que presta. Este enfoque utilitarista, por su parte, banaliza al Estado, símbolo máximo del poder político moderno, que reducido a simple prestatario de servicios, queda expuesto a comparaciones en las que tiene todas las que perder¹⁷. Asimismo, la *pérdida de eficacia del Estado* comporta la erosión de su legitimidad ante el ciudadano, pues cada vez ofrece menos respuestas a sus demandas de seguridad y desarrollo.

En otras palabras, ha hecho crisis la idea de que el Estado es portador de un proyecto moral, siendo el “*retorno a la sociedad civil*” al que estamos asistiendo una expresión de dicha crisis¹⁸. Y, en consecuencia, el Estado ya no es el mediador obligado entre el interés general y los intereses particulares, sino un conjunto de instancias especializadas. Se ha transformado en gestor de una serie de intereses públicos más que del interés general y con ello se ha trivializado. Su legitimidad pasa a depender menos de la fidelidad a la voluntad general que de su capacidad de gestionar con eficiencia, cosa que reemplaza la búsqueda de principios unificadores. Entran así en juego lógicas funcionales: los ciudadanos son ahora, en primer lugar, consumidores/ahorradores dentro de un mercado, en el cual el Estado es un prestatario de servicios.

Pero esta *desintermediación política* no devuelve el poder a los ciudadanos, porque, de hecho, no es creadora de comunidad política. Por el contrario, lo que hace es fortalecer la influencia de los gobernantes sobre la ciudadanía a causa, precisamente de la falta de una verdadera comunidad política y de convicciones y valores compartidos, sin los cuales, no lo olvidemos, el propio mercado pierde también su racionalidad¹⁹. Por ello, en gran parte el tan cacareado retorno a la sociedad civil no es sino una vía libre a la gran empresa y a la lógica economicista que la guía.

17 En este sentido, GUÉHENNO, Jean-Marie (2000), op. cit., p. 42.

18 PÉREZ DÍAZ, Víctor (1993), *El retorno de la sociedad civil*, Madrid, Alianza, pp. 85 y ss.

19 GUÉHENNO, Jean-Marie (2000), op. cit., p. 60.

Cuando la actividad humana se libera del espacio, vuelan en pedazos las democracias territoriales, reemplazadas por *agrupaciones temporales de intereses*. Las redes sustituyen así a la política, que pierde legitimidad como espacio común, y desaparece la solidaridad espacial propia de las *comunidades territoriales*, aceptándose ésta tanto más difícilmente cuanto que no se confía en el Estado para administrarla eficazmente. La confrontación profesional de los intereses sustituye el debate público -único medio que puede garantizar la expresión de la libertad ciudadana- y en lugar de un espacio político, lugar de solidaridad colectiva, no hay sino percepciones dominantes, siempre parciales, tan efímeras como los intereses que las manipulan

Decadencia de la sociabilidad

Un contexto como el descrito imposibilita una búsqueda colectiva y democrática del interés general y favorece el repliegue a una conciencia moral individual, aunque compartida, cayéndose en la indiferencia respecto a los fundamentos que regulan la participación democrática. En este sentido, podemos constatar que la visión contemporánea de la democracia es extremadamente *individualista* y, por ello, negadora de su misma esencia, pues la banalización de la política y la progresiva pérdida de su espacio conlleva una grave amenaza para la democracia en el interior de ella misma.

La democracia liberal se apoyaba en dos postulados, ambos cuestionados hoy: 1º) La existencia de una esfera política, lugar del consenso social y del interés general. 2º) La existencia de actores autónomos, ya que hoy sólo hay situaciones efímeras en virtud de las cuales se traban alianzas provisionales²⁰. En realidad, el crecimiento de la vertiente asistencial de los Estados del Bienestar ha llevado a la supeditación de los ciudadanos a los poderes públicos, objeto constante de sus demandas. De esta

²⁰ GUÉHENNO, Jean-Marie (2000), op. cit., p. 60.

suerte, el factor corporativo ha entrado en el juego democrático a fin de resolver necesidades particulares y los ciudadanos, en vez de comportarse con libertad y madurez, sustituyen el esfuerzo y la iniciativa individuales por la dependencia, en un sistema que, evidentemente no es aristocrático, pero que se aleja mucho del ideal de democracia participativa²¹. La desmotivación en la participación política es un hecho que se pone de manifiesto en las consultas electorales, de forma que se ha podido decir que la crisis que recorre las viejas democracias es una *crisis de inobservancia*²².

Y como la “desintermediación política” no devuelve el poder a los ciudadanos porque, de hecho, no es creadora de comunidad política, como tampoco lo es el mercado, el resultado es el repliegue acomodaticio, la reclusión en la privacidad propia de las sociedades satisfechas y la *afirmación individualista de la libertad*. No hay que olvidar que nuestros ciudadanos son consumidores de democracia, más que constructores de la misma y ser consumidor no es lo mismo que ser ciudadano: el mercado no ayuda a configurar el ejercicio responsable de la libertad al impedirnos hablar como ciudadanos sobre las consecuencias de nuestras acciones. De ahí la fragilidad de nuestras democracias, en las que la experiencia colectiva se ha convertido en artificiosa y en las que se miran, por lo general, sólo los derechos propios: reclamamos el derecho a tener derechos, pero muchas veces *no queremos oír hablar de asunción de responsabilidades*.

La decepción frente a lo político tiene diversos cauces de expresión y el desarrollo de organizaciones humanitarias es uno de ellos: habiendo renunciado a encontrar en el orden político soluciones para los problemas y desgracias de la humanidad muchos ciudadanos se inclinan por crear solidaridades concretas en un mundo demasiado abstracto. Muchas de tales asociaciones

21 OLLER i SALA, M^a Dolors, (1994), Ante una democracia de "baja intensidad". La democracia por construir, Cuadernos Cristianisme i Justícia, nº 56, p. 10.

22 FLORES D'ARCAIS, P., (1992), “Un ideal hecho farsa”, *El País, Temas de nuestra época*, año VI, nº 239, 19 de junio, p.3

(ONG's, colectivos diversos, etc.) pueden llegar a vivir unas al lado de las otras, ignorándose por completo entre sí. Y la razón es que su lógica generalmente responde a las exigencias de una *moral individual*. Por ello es tan importante que organizaciones y grupos de este tipo ayuden a repensar los postulados de una moral pública, actuando también a nivel estructural.

* * *

En definitiva, en un mundo como el que vivimos y ante los retos que tenemos planteados, nos urge rehacer el espacio de la política y recrear los sujetos políticos, descubriendo las geografías inéditas del poder y de la vida pública hoy. Y habida cuenta que la crisis del debate político supone la traducción de la progresiva eliminación de la reflexión de fondo sobre la sociedad y sobre la capacidad para comprenderla y transformarla de manera colectiva, se impone que nos planteemos el problema de la *necesidad de una ética pública* capaz de penetrar en la sociedad y transformarla, evitando que la democracia pueda convertirse en un simple simulacro tras el que se esconde el poder de los poderosos de siempre.

En realidad, está en juego la credibilidad de la democracia contemporánea. Y si el verdadero problema de ésta reside en el descontento de los ciudadanos y en el repliegue de éstos al ámbito privado, hay que velar para que tal abandono sólo sea el rechazo de una particular forma de expresión política, no un rechazo de la democracia como tal.